



*"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría*

**Editorial**

**2**

*¿Hacia dónde va Cuba?*

**Político**

**4**

*Expresión ciudadana*

**Político**

**6**

*Interés privado versus interés público*

**Económico**

**8**

*Precios, salarios y productividad laboral*

**Social**

**10**

*Atracos al gremio de transportistas*

**Social**

**12**

*Incremento de homicidios y fracaso de las políticas de seguridad*

**Reporte IDHUCA**

**15**

*Lluvias, dengue e ineficacia*

## **¿Hacia dónde va Cuba?**

*Los debates en torno al posible derrotero de Cuba, una vez salido de escena Fidel Castro, han cobrado actualidad a raíz de la más reciente crisis de salud del máximo dirigente cubano. Esta vez no se trata de discusiones a propósito de algo incierto, sino acerca de una realidad inminente, acentuada por la propia decisión de Castro de ceder sus principales atribuciones políticas –jefatura de Estado, del Consejo de ministros y de las Fuerzas Armadas— a su hermano Raúl Castro, segundo al mando desde los albores del proceso revolucionario al cierre de los años cincuenta. A partir de la decisión tomada por Fidel Castro, es sobre las espaldas de Raúl Castro que recaerá la continuidad del proyecto por el cual aquél apostó todas sus energías. Y es que, en efecto, se podrá estar de acuerdo o no con el modelo cubano, pero es indiscutible que él mismo lleva la marca imborrable de quien más ha trabajado en su construcción como proyecto ideológico-político. Tanto se ha identificado al socialismo cubano con Fidel Castro –no sólo por obra de los enemigos del régimen, sino también por obra de los mismos aparatos de propaganda del partido comunista de Cuba— que su renuncia al poder inmediatamente pone en la mesa de discusión el futuro de la isla.*

*Sin duda, el modelo de conducción política, económica y social prevaleciente en Cuba debe mucho a Fidel Castro. Sin embargo, por más que sus enemigos se froten las manos deseando su muerte de una buena vez, para que así se inicie el derrumbe irremediable del modelo, no hay que perder de vista que tras el histórico líder –como sostén fundamental de su poder— hay un engranaje en el que lo político, lo económico, lo social y lo cultural se encuentran firmemente entretejidos. Ese engranaje, forjado a lo largo de casi cinco décadas, no se entiende sin Fidel Castro, pero lo trasciende y puede, si quienes lo regentan –una vez fuera de escena Fidel— no deciden lo contrario, seguir funcionando como si este último continuara en el ejercicio del poder. Es decir, perfectamente puede haber una castrismo sin Castro.*

*Precisamente, esta es la lógica que se impone con la elección de Raúl Castro como máximo jerarca político en Cuba. Asumiendo como un hecho que su hermano no va a retornar de nuevo al poder –aunque si esto sucediera, las hipótesis que aquí se plantean quizás no variarían demasiado—, Raúl Castro es la mejor garantía de que el rumbo de Cuba será el trazado desde siempre por Fidel Castro. Y ello por la sencilla razón de que Raúl Castro es uno de los principales artífices del modelo político –de seguridad, de control, de vigilancia, etc.— prevaleciente en la isla.*

*Dejando de lado los comentarios, esgrimidos muchas veces sin pruebas concluyentes, de que el verdadero poder en Cuba estaba en Raúl y no en Fidel, lo cierto es que el primero concentraba una importante cuota de poder, sólo comparable con (y superada por) la de su hermano. Ahora –y si Fidel no se recupera— nadie tiene más poder en Cuba que Raúl Castro. ¿Poder para qué? Por lo que parecen indicar las evidencias disponibles, para dar continuidad al castrismo; es decir, al modelo de partido único y de control estatal del ámbito privado (económico y no económico), pero también de bienestar social (hasta donde lo permite un modelo económico que en su conjunto es poco competitivo).*

*De tal manera que con Raúl Castro se resuelve el problema de la continuidad, por lo menos temporalmente. Así las cosas, no tiene ninguna razón de ser la algarabía de muchos por la enfermedad de Fidel Castro. Tampoco la tristeza de otros, para quienes sin este último todo el proceso cubano se irá irremediablemente al traste. Con Raúl Castro en el poder no se ve posible un cambio político en la isla, no importa en qué sentido se lo entienda. Por supuesto que en política todo es posible y a lo mejor se suscita algo distinto. Lo sucedido en la ex URSS, con Mijail Gorbachov, no puede desestimarse como una anomalía histórica irrepetible.*

*Con todo, para afectos de análisis, hay situaciones que, con la evidencia disponible, se tornan más posibles que otras. Y en lo que se refiere a Raúl Castro lo más probable es que él sea más un baluarte de la continuidad que del cambio. Ahora bien, ¿continuidad hasta cuándo? Porque si algo no puede dejarse de lado es la energía que pueda tener aquél para continuar el proyecto que le ha encomendado su hermano. A Fidel Castro lo está afectando la vejez, simple y sencillamente. Las dolencias de su cuerpo le están enseñando —les ha enseñado a quienes lo habían olvidado— que nadie es eterno, que la gente nace, crece, envejece y muere. Es una lección que también vale para su hermano, quien es casi tan viejo como él y quien, como él, pronto enfrentará las dolencias de un cuerpo cansado.*

*En este sentido, la continuidad que pueda garantizar Raúl Castro sólo lo será mientras él tenga las energías físicas y mentales para garantizarlo. No hay que engañarse: eso no será por mucho tiempo. Y justamente cuando falle —cuando ya no pueda ejercer el poder o lo abandone abruptamente— se abrirá un debate intenso en Cuba. En ese momento seguramente se va a plantear el problema de un cambio político en la isla. Las razones para ello son varias, pero la principal es que más allá de Raúl y Fidel Castro, no se ve a una figura sobresaliente, capaz de asegurar la supervivencia a largo plazo del castrismo. Quizás lo que haya sean líderes menores, con poca ascendencia entre sus pares; es decir, más con ansias de acceder a una cuota de poder que a obedecer a otros considerados iguales. Y, por esto último, lo más probable es que, cuando falte Raúl Castro, afloren las disputas en el seno del partido comunista cubano, disputas que pueden dar lugar a un clima de incertidumbre, pero también a un ambiente de apertura política, necesario para que los cubanos debatan acerca del tipo de sociedad que desean.*

*En otras palabras, lo que aquí se plantea es que el problema del cambio político en Cuba es poco probable que se enfrente con la salida del poder de Fidel Castro y el arribo de su hermano, Raúl. Lo deseable sería que éste preparara el terreno para un cambio político ordenado, donde los logros sociales de la revolución se combinaran con una mínima democratización política. Es difícil que eso suceda. Lo más probable es que haya que esperar, para que el debate sobre el cambio político se abra paso, a que Raúl Castro también se retire del poder. Con todo, no hay garantía de que lo que pueda suceder entonces sea lo más deseable o lo más favorable para la sociedad cubana. Serán, sin duda, momentos de incertidumbre.*

## Expresión ciudadana

Sería un error afirmar que en el país no existen esfuerzos de la sociedad organizada por hacer oír su voz. Tras los disturbios del 5 de julio, diversos sectores sociales se pronunciaron en contra de tales hechos. En el ambiente ha primado una consideración: la violencia nunca es justificable y no puede concebirse como un medio legítimo para acceder al poder. En ese sentido, la paz debe ser el valor, al menos como aspiración, que motive la convivencia social, pues sólo así El Salvador podrá avanzar en su trayecto hacia una verdadera democratización. Esta motivación llevó a un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil a formar un colectivo que expresara ese deseo por un país distinto. Con ese objetivo, este grupo organizó, el 22 de julio, una concentración frente a la Plaza de las Américas, para expresar la urgencia de paz en la sociedad. El evento logró convocar al menos a unas mil personas, según estimaciones de los organizadores.

Ese mismo día, pobladores de la región norte del país iniciaron una peregrinación hacia San Salvador, para exigir la prohibición de la explotación minera en esa zona y protestar contra la construcción de presas hidroeléctricas. Este movimiento fue apoyado por miembros de organizaciones sociales y por dirigentes del FMLN. Al final de la caminata, el 23 de julio, los manifestantes entregaron una solicitud a la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, en la cual expresaban sus peticiones. Al final del encuentro, la titular aseguró que estas demandas serían consideradas antes de aprobar algún proyecto de explotación minera en la zona. En la marcha, ejemplo del uso de la participación ciudadana como mecanismo de presión, participaron los pobladores directamente vinculados con el problema o los potencialmente afectados, quienes se sumaron al esfuerzo al no sentirse ajenos al impacto de los proyectos mencionados. Este tipo de acciones demuestra que, ante una necesidad o problema, la acción colectiva puede hacer sentir el descontento

social hacia las autoridades. Ahora bien, falta esperar si estas demandas serán asumidas por el gobierno cuando éste tome decisiones en torno a la explotación minera o a la construcción de presas hidroeléctricas.

Por su lado, la marcha por la paz fue un llamado de alerta —si se quiere— para hacer conciencia a la sociedad en general y al gobierno, en particular, sobre la necesidad de una convivencia más pacífica entre la población. Este movimiento aprovechó la coyuntura y fue inteligente en su estrategia pues, con anticipación, advirtió a los partidos políticos de abstenerse a participar en el acto, a fin de evitar la instrumentalización del hecho. En otras palabras, impidieron que los partidos acentuaran una vez más la polarización política en el país. De igual modo, este colectivo difundió su convocatoria a través de los medios de comunicación. Teniendo en cuenta estos factores y el objetivo de la marcha: pronunciarse en contra de la violencia y a favor de la paz, era de esperarse que la población acudiera de manera masiva. No obstante, dadas las condiciones tan favorables que se presentaron, la participación social fue baja. De este modo, se impone una pregunta ¿por qué un buen número de población de la capital no participó en este evento?

### Las razones para no participar

En el país se ha insistido en que los movimientos sociales no logran apoyo masivo, tal como se esperaría, y la marcha por la paz, consideramos, es un buen indicador de ello. Para explicar la participación de la gente en estos actos, encontramos diversas posturas. Una visión estructural de la situación nos dirá que las condiciones socioeconómicas configuran la participación en esfuerzos organizados o en la vida política, en general. Por tanto, se podría considerar que, en el país, dadas las condiciones económicas adversas para grandes sectores, la población está más preocupada por sobrevivir día a día que por sumarse a esfuerzos

de este tipo. Un análisis psicológico dirá que la raíz del problema está en las motivaciones que propician o no la participación política. Finalmente, una postura racionalista apuntará que las personas se suman a estos actos después de realizar un cálculo costo-beneficio. Pese a estas explicaciones, es pertinente analizar los factores internos y externos que inciden en el impacto de actividades como la referida manifestación.

Entre los internos se destaca que, muchas veces, los movimientos fallan en su estrategia para expresar su descontento, pues no logran ampliar el círculo de conflicto; es decir, el problema de fondo y el objetivo de su lucha no son presentados con suficiente fuerza ni con las implicaciones que estos tienen para la población. Dicho de otra forma, mientras no se logre convencer que los problemas incumben (y afectan) no sólo a los actores directos, sino a toda la población (o a la mayoría), estos movimientos lograrán un leve impacto o podrán ser fácilmente manipulados por la clase política o el gobierno, tal como sucedió con la lucha por la no privatización de la salud, años atrás.

Lo anterior nos lleva a los factores externos. Por un lado, la participación de dirigentes políticos le resta peso al movimiento social y a sus objetivos; además, le resta protagonismo, pues muchas veces su afán de vanguardia impide que el movimiento se consolide y tenga una identidad propia. En ese sentido, los salvadoreños que no participan perciben que estos actos son expresión de partidos políticos y no un movimiento con objetivos autónomos. Por el otro, a este oportunismo debemos agregar el papel de las empresas mediáticas en su cobertura sobre los hechos. Casi siempre, estas destacan sólo sus efectos colaterales (problemas de tráfico, uso de la violencia, ataques a algunos periodistas) y no las razones de peso que motivan las actividades.

En el caso que nos ocupa, la manifestación por la paz logró desvincularse de adscripción partidista, usó de manera inteligente a los medios de comunicación y contó con el apoyo de representantes de organizaciones sociales.

Además, cumplió su objetivo de pronunciarse contra la violencia y decir sí a la paz. Por tanto, podemos decir que los factores antes señalados fueron controlados. Pese a ello, el número de participantes no fue tan masivo. La respuesta, entonces, debe buscarse en factores de tipo cultural.

## **Identidad ciudadana**

Hay que partir de una consideración previa: la falta de una conciencia ciudadana y el papel que juegan las múltiples identidades (creadas desde luego a partir de diferencias sociales) no permiten un espacio de encuentro en la vida pública de los salvadoreños. Así, ser ciudadano —es decir conocer los derechos y exigir por su cumplimiento— pasa por la participación política: tratar de incidir en la toma de decisiones vinculantes, sobre todo, en una sociedad que se precia democrática. En ese sentido, en El Salvador buena parte de la población no se suma a esfuerzos organizados de ningún tipo, a excepción de congregaciones religiosas o actividades más vinculadas al ámbito privado. Esta debilidad quizás se deba en buena parte a que los salvadoreños no nos percibimos como ciudadanos; es decir, sujetos de derechos, y no dejamos a un lado las identidades sociales construidas, principalmente, desde diferencias socioeconómicas. Por tanto, ello repercute en que la mayoría de la población no participe en la vida política del país en una de sus dimensiones básicas: la expresión organizada del descontento social.

Así las cosas, difícilmente los movimientos sociales lograrán ganar más espacios y canalizar demandas. Puesto en estos términos, no es de extrañar que la marcha por la paz no haya tenido mayor participación, ni que la peregrinación de las comunidades del norte del país haya sido sólo apoyada básicamente por los implicados directos. El resto de la población parece no identificarse con estos movimientos, ni con sus causas, no importa si estas carecen de vínculo partidista o si apelan a valores sociales supremos como la paz.

## Interés privado versus interés público

En repetidas ocasiones, diversos actores han insistido en la necesidad de implementar reformas fiscales, sobre todo, aquellas destinadas a ampliar la base tributaria del sector empresarial —mismo que ha mostrado su negativa ante cualquier medida similar— e implementar vías de ingreso como el impuesto predial, aplicado en otros países de la región. Como respuesta, el gobierno de Antonio Saca ha optado por otra estrategia: reducir en lo posible prácticas como la elusión y evasión fiscales, lo cual, según el gobierno, permitirá incrementar la inversión social. Pese a ello, los datos revelan que aún con este tipo de medidas la recaudación es insuficiente. Hasta el momento, los cambios planteados han sido sólo tímidos intentos, pues es un tema sensible para los grupos empresariales y el sector financiero, que ejercen presión para no ser afectados.

En sintonía con la postura del mandatario, no debe extrañar que el actual ministro de Hacienda, William Hándal, afirmara a un medio local que su labor como titular de esa institución es “no incomodar” a nadie. Esta declaración deja en evidencia que la labor de un funcionario público aún no es bien entendida, y mucho menos asumida con seriedad, por nuestra clase política. Ciertamente, ningún ministro debe hacer de la molestia su estrategia de trabajo; sin embargo, cuando se busca el beneficio común de los salvadoreños esta “incomodidad” es necesaria. En ese sentido, bajo el criterio del interés público se deben aplicar medidas que, si bien no gusten o afecten a un sector, proporcionen beneficios colectivos, sobre todo en materia económica.

Pareciera que a nuestros funcionarios se les olvida que las medidas, normas y leyes no se diseñan para la conveniencia ni el agrado de unos pocos, sino para la convivencia de la mayoría y la procuración de bienestar social, tareas que el Estado debe

llevar a cabo, sin importar la ideología ni interés de quienes lo administren. Por tanto, aducir que con alguna medida fiscal se afecta a pequeños grupos o sectores empresariales es un argumento inconsistente, pues el criterio fundamental de estas decisiones debe ser, como ya señalamos, el interés público. Con este tipo de argumentos, se legitima la implementación de acciones contrarias a los intereses de la mayoría; en estos casos, por supuesto, a los funcionarios no les importa incomodar a la población, a fin de no perjudicar a minorías poderosas.

El ministro debería saber que su objetivo al frente de la institución que preside es servir a la población y además, hacerlo de manera eficaz. En ese sentido, valdría la pena que este funcionario asumiera las necesidades del país a la hora de decidir una diferente política fiscal. A todas luces, las reformas en materia tributaria redundarían en mayores ingresos para el Estado, ello haría eficaz la labor del ministerio y haría posible mayor inversión social, lo cual no ocurrirá si se continúa gobernando en función de los vaivenes del interés privado.

### Otros ejemplos

En El Salvador, no sólo las reformas fiscales son evadidas por ser “incomodas”. Como se ha afirmado ya en este semanario, la reforma al sistema de pensiones y el nivel de endeudamiento del país deben ser temas prioritarios para la clase política y el gobierno en particular. Ahora bien, con actitudes como las del actual ministro de Hacienda, difícilmente se podrán llevar a cabo, pues su idea con respecto a estos temas también es no “afectar” a ciertos sectores o empresas. Tal es el caso de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP). En la actualidad, el Estado ha visto agotadas sus posibilidades para financiar las pensiones, lo cual además incide en la planificación del presupuesto

general del país y, por extensión, en los montos destinados a áreas como educación y salud.

Para resolver este problema, las entidades gubernamentales evalúan posibles salidas. El ministro de Hacienda ha establecido comunicación con las referidas empresas para encontrar una solución, bajo la excusa de no afectar ni a estas ni a los afiliados, lo cual es cuestionable y risible. Lo primero porque estas medidas deben ser consultadas y del conocimiento previo de los afiliados al sistema; es decir, de quienes se vean afectados por cualquier medida que se aplique. Risible, pues si el señor ministro lo que busca, de nuevo, es “no incomodar” a las empresas y sus intereses, en definitiva, lo más probable es que los costos de esos cambios deberán ser asumidos por alguien, es decir, por la población en general.

Un ejemplo más de ese tacto político puede verse en la negativa del gobierno por acatar recomendaciones de organismos, nacionales e internacionales, para la defensa de los derechos humanos. Estos han emitido denuncias sobre las aberrantes violaciones —asesinatos masivos, desapariciones, torturas, entre otras— cometidas por funcionarios y altos mandos militares durante la guerra, y han solicitado las penas respectivas para los culpables. No obstante, para la postura oficial remover el pasado es “incómodo”, es necesario perdonar y olvidar, cerrar las heridas, tal como el gobierno de Saca ha pregonado.

En materia de política exterior, también el gobierno se ha caracterizado por no “incomodar” al que considera su principal aliado, Estados Unidos, y mostrar su apoyo incondicional. Como prueba de ello aún mantiene destacado un batallón militar en Iraq, pese a la muerte de 4 soldados salvadoreños en ese territorio, a la doble moral que expresa el gobierno en torno a este uso justificado de la violencia, y a la innecesaria contribución de nuestro país con

la ofensiva militar del gobierno de George W. Bush en esa región del medio oriente.

## ¿Hacia dónde se mueve la balanza?

Como vemos, pues, los gobernantes y funcionarios conciben el tacto político de manera conveniente y complaciente a un reducido sector social. Al contrario de esta idea, en política se trata de actuar con tacto, sí, pero sobre todo con responsabilidad y transparencia ante los intereses generales o de amplios sectores de la población, y no ante intereses económicos de pequeños grupos. Además, la clase política no repara en que esa “incomodidad” es aceptable, en el caso específico de los impuestos, en la medida en que con ella se beneficiaría a la población: con mayores ingresos, el gobierno debe, o al menos se esperaría, incrementar los gastos en la procuración de bienes sociales como la salud y la educación.

De lo contrario, si no se toca a estos sectores, es decir, si no se les incomoda, difícilmente el país podrá salir adelante. Ya John Rawls afirmaba en su teoría sobre la justicia que una desigualdad es aceptable si con ella se beneficia a aquellos que están en condiciones menos favorables. El tema de la recaudación de impuestos es el más claro ejemplo de aplicación de esta idea. Para ello, se necesita de un sistema de tributación por medio del cual quien obtenga mayores ingresos, declare impuestos en igual relación a aquellos. No obstante, en nuestro país estamos lejos de ese tipo de medidas, porque la noción de justicia del gobierno sigue siendo aquella vinculada sólo a las libertades individuales neoliberales, basadas en el mercado, y no en criterios de igualdad para todos.

Esta falta de voluntad del gobierno se hace evidente al momento de sopesar en la balanza entre el beneficio común e intereses económicos privados de algunos sectores. El resultado tiende a ser favorable siempre a los grupos de poder.

## Precios, salarios y productividad laboral

Una de las razones más utilizadas por los empresarios para mostrarse en contra de un aumento salarial es que los incrementos deben estar acompañados por un aumento en los niveles de productividad laboral. De acuerdo a la teoría neoclásica, cuando se permite un alza salarial que no está acompañada de una mayor productividad, se está haciendo un grave daño a las empresas, ya que el incremento salarial no se corresponde con una mayor producción de bienes por trabajador en una unidad de tiempo —hora, día, mes—. Con esto, aumentan los costos empresariales y se genera una reducción en las utilidades que se traduce en una baja en los niveles de inversión.

Si los empresarios son fieles a la lógica expuesta antes, para este año debería confirmarse un aumento salarial. De acuerdo con el *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005*, del PNUD, entre 1991 y 2004 la productividad de la mano de obra aumentó de manera considerable. En este periodo, el alza más sustancial sucedió entre 1991 y 1997; posteriormente, entre 1997 y 2004, hubo un leve decremento, pero en términos generales se mantuvo un buen nivel de productividad. El comportamiento de la productividad de la mano de obra contrasta con la evolución presentada por el índice de salario mínimo y el índice de salario medio, ambos evaluados en términos reales. Entre 1989 y 2004, los indicadores muestran una reducción originada por los incrementos en el salario nominal, que no han sido suficientes para hacer frente al alza de precios en los bienes que constituyen los medios de vida de los trabajadores y las trabajadoras.

En este sentido, es conveniente hacer una aclaración importante. El salario nominal es la remuneración que percibe el trabajador en términos monetarios, mientras que el salario real se refiere a la capacidad adquisitiva en término de las cantidades de bienes y servicios que se puede adquirir con el salario nominal. Si el nivel de precios de los bienes y servicios necesarios para la existencia de los trabajadores aumenta vertiginosamente y el salario nominal se mantiene constante, el salario real tiende a reducirse. Esta aclaración desenmascara una de las ideas que

se usa tradicionalmente para oponerse a un aumento salarial: no es necesario un aumento salarial, ya que El Salvador posee uno de los salarios mínimos más altos de la región centroamericana. Efectivamente, en términos monetarios el país puede contar con un salario superior al de otros países, pero de eso no se deduce que los trabajadores cuenten con una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque el dinero percibido por los trabajadores no es suficiente para la manutención de la familia, ya que los precios de los bienes y servicios locales están aumentando más rápido que en los países vecinos. Este es el problema en El Salvador: el precio de los bienes y servicios parece crecer con mayor rapidez que el salario nominal; por tanto, a la postre, siempre se experimenta una reducción en el salario real. Con el mismo salario, un trabajador tiene menor capacidad adquisitiva, cada año que transcurre, que el año anterior.

Ahora bien, si en términos globales la productividad de la mano de obra ha aumentado en los últimos años, cómo se puede entender que no esté acompañada de incrementos en el salario real —que implica también incrementos en el salario nominal—. Una respuesta a esta pregunta pasa por comprender dos hechos destacados en el citado documento del PNUD. Por un lado, el sector productor de bienes ha registrado un incremento en la productividad laboral en los últimos años, pero registra una reducción en el salario real. Por el otro, en el sector servicios sucede lo contrario: la productividad laboral ha tendido a la reducción, pero registra un ligero aumento en el salario real. Esto demuestra que la concepción neoclásica sobre la determinación de los salarios no se aplica al país. Si así fuera, los empleados del sector productor de bienes deberían haber experimentado un aumento en el salario real, mientras que los del sector servicios no.

Al observar la dinámica de la economía salvadoreña, vale la pena destacar que el sector productor de bienes se encuentra sometido a una mayor competencia debido a la apertura comercial. Por su parte, el sector servicios se ha visto beneficiado por un bajo nivel de competencia, lo que ha permitido que algunos empresarios del



sector se hayan beneficiado de rentas en condiciones de monopolio y oligopolio. Mientras que el precio de los servicios tiende hacia un incremento más rápido que el de los bienes, por la falta de competencia, los empresarios productores de bienes se ven afectados porque sus empresas necesitan insumos proporcionados por el sector servicios: telecomunicaciones, energía eléctrica, agua y servicios financieros, principalmente. Los costos de operación aumentan, pero los empresarios productores de bienes no pueden transmitir esos costos a los precios, debido a que la competencia es fuerte.

En este sentido, el factor de la producción que debe soportar el mismo nivel de remuneración es el trabajo, a pesar de que esté aumentado su nivel de productividad. Los empresarios del sector productor de bienes están ante una disyuntiva pues, para continuar operando al nivel de precios en condiciones de mercado, deben realizar el pago de los servicios necesarios para el funcionamiento de su empresa —no importando lo caro que estos se encuentren— y para conservar el margen de rentabilidad deben mantener fijo el salario de los trabajadores.

En el sector servicios los precios son más altos gracias al bajo nivel de competencia. Además, en el caso particular de la energía eléctrica, el Estado se compromete, mediante la Ley de Electricidad, a que las generadoras y distribuidoras de energía deben, tarde o temprano, ser remuneradas por el incremento en sus costes de producción y comercialización. Al tener el amparo del Estado, las empresas de energía eléctrica aseguran la rentabilidad de su negocio, ya que este aval obliga a las empresas y hogares a pagar la energía a los precios establecidos por ellas.

En nuestro país es curioso que el Estado avale los incrementos en el precio de la energía eléctrica, en el coste de transporte terrestre y las tarifas de agua, pero no pueda avalar un incremento salarial sin que antes pase por un Consejo que estudie el caso y en el cual los empresarios tiene una presencia determinante. En otras palabras, se reconoce la necesidad de aumentar los precios en los servicios de energía, agua y transporte, para que los empresarios de estos subsectores puedan continuar operando con solvencia, pero se objeta el aumento salarial para hacer frente al incremento en el costo de la vida.

Cuando algunos sectores de la empresa privada argumentan que un alza salarial no se puede sostener porque aumentaría sus costos y disminuiría la rentabilidad de sus empresas, olvidan que el verdadero problema en la estructura de sus costes de producción no es el salario que pagan a sus trabajadores —un salario que de por sí se encuentra por debajo del nivel de productividad— sino más bien los costos de operación en que incurren debido al pago de los servicios. En este sentido y desde una perspectiva más amplia, el problema no son los trabajadores, sino la existencia de empresas ineficientes en el sector servicios que operan en condiciones de monopolio y oligopolio. Esta ineficiencia se hace manifiesta en que el nivel de productividad laboral mantenido por los trabajadores de dichas empresas está por debajo del salario real. El nivel de ingresos que registran las principales empresas del sector servicios es tan elevado que es suficiente para incrementar considerablemente sus utilidades y permitir una leve alza salarial en sus trabajadores.

Una revisión de la rentabilidad de los bancos más importantes del país, las generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, y las empresas de telecomunicaciones mostraría que a pesar de que la economía ha tenido bajas tasas de crecimiento en los últimos cuatro años, dichas empresas han mantenido un buen nivel de rentabilidad. Cuando el sector productor de bienes se ha caracterizado por el estancamiento —principalmente el subsector industrial—, el sector servicios ha continuado en expansión, porque ha crecido a costa del deterioro del primero. Y ni qué decir del sector agrícola, condenado al abandono por esa misma lógica económica.

De todo lo anterior se desprende que no sólo las familias deben pelear por una baja en el nivel de precios de los servicios, sino también los empresarios, ya que los mayores pagos que hacen a las empresas de ese sector premian su ineficiencia y castigan la eficiencia de los trabajadores del sector productor de bienes. Lo más apropiado es aumentar los ingresos de los trabajadores para que se incremente el salario real y, además, que se disminuya el gasto empresarial en el pago de los servicios. Un Estado, atrapado en las redes de la oligarquía financiera, es el mayor obstáculo para ello.

## Atracos al gremio de transportistas

Las últimas dos semanas del mes de julio y la primera de agosto se han caracterizado por la quema de al menos 5 unidades de transporte público. Con estas últimas suman unas trece unidades incendiadas en lo que va del año, cuyos daños oscilan entre los 20 mil y 50 mil dólares por unidad. El gremio de transportistas lleva alrededor de dos años siendo acosado por diferentes factores, entre los cuales destacan cuatro con mayor frecuencia y magnitud. En primer lugar, las maras o pandillas; en segundo, el encarecimiento de hidrocarburos; en tercer lugar, el plan de modernización gubernamental; y, en cuarto, el papel que juega la ciudadanía.

El sector transporte se ha visto afectado fuertemente por las pandillas desde inicios del año 2004. El problema se agudizó a inicios de 2006, cuando estos grupos decidieron establecer una cuota semanal a las diferentes cooperativas del transporte. Los extorsionistas aseguran a sus víctimas (empresarios y empleados del transporte) que no les pasará nada toda vez cumplan con la cuota establecida. Ante la constante de las extorsiones, los transportistas pidieron la protección de las autoridades estatales. La Policía Nacional Civil (PNC), por su parte, aseguró estar investigando a estos grupos que tanto atemorizan a este gremio y a la ciudadanía en general. Como medida de reacción ante la mencionada problemática, la PNC creó el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), a mediados de enero, el cual tendría bajo su cargo la seguridad del gremio de transporte, así como identificar y erradicar a estos grupos de extorsionistas, que no sólo cobran, sino que, matan a quien no cumple con la "renta".

GOPES depende de la Subdirección de Áreas Especializadas Operativas de la PNC, así como también la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO); ambas agrupaciones han sido formadas con la idea de

poner fin a las acciones de las pandillas. Sin embargo, los frutos obtenidos ponen de manifiesto la inoperancia de estas instancias a la hora de combatir este delito. Según datos, de la unidad de investigación social de *La Prensa Gráfica*, en lo que va del año han fallecido 65 personas en manos extorsionistas y la policía sigue sin poder identificar a los responsables.

Según cálculos realizados por la PNC, los pandilleros obtienen un promedio mensual de \$130 mil 834, de los cuales \$119 mil 595 son producto de las extorsiones que realizan al sector transporte (buses y microbuses); el resto corresponde a los vendedores, pick-ups, taxis, negocios, camiones y estudiantes que también son extorsionados. El subdirector policial Pedro González explicó que las pandillas han creado nuevas modalidades de sostenibilidad económica, desde el cobro de cantidades mínimas de dinero hasta exigencias más duras que implican otros delitos, como asesinatos, amenazas, privaciones de libertad o daños materiales.

El segundo factor que ha afectando a los transportistas es el alza continua de los hidrocarburos. La inestabilidad de los precios del crudo y la eliminación del subsidio por parte del gobierno llevó a este sector a realizar un aumento del 40% en el pasaje en tan sólo dos años. El primer aumento, de 20%, se dio en mayo de 2005 y, el segundo a inicios de junio del presente año.

Por otro lado, en el país existe una planta procesadora de biodiesel y varios ingenios que están produciendo etanol. Según estudios realizados por el Instituto Técnico Centroamericano (ITCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), esta última podría ser una buena alternativa para el sector transporte, además de ser un producto ecológico. Sin embargo, el gobierno aseguró que el país no tiene la capacidad para producir las cantidades necesarias para

abastecer el mercado de los hidrocarburos. Ante la presión generada por los altos costos del petróleo, el partido FMLN ha realizado contactos con el gobierno venezolano, con el objetivo de negociar una tarifa preferencial al mercado salvadoreño. No obstante, la postura gubernamental ante dicha iniciativa no ha sido favorable, lo cual ha cerrado la posibilidad de negociar con ese país.

Cabe recordar que el plan de modernización gubernamental para el sector transporte fue diseñado en la gestión de Francisco Flores y posiblemente será ejecutado por el actual gobierno. Entre los cambios que se establecen en este plan está contemplada la renovación de unidades y el uso de tarjeta prepago para los usuarios. El plan de modernización podría funcionar si este contara con las regulaciones apropiadas y el financiamiento necesario para que los transportistas puedan optar por renovar sus flotas. Porque la palabra modernizar no sólo implica comprar nuevas unidades y una nueva modalidad de pago. Es necesario un reordenamiento vial; capacitaciones para los empresarios, motoristas y cobradores; mayor control y rigurosidad a la hora de brindar los permisos de líneas; y monitoreo constante en las diferentes unidades de transporte. En pocas palabras, es necesario que el gobierno haga una mayor inversión social en el sector y tome en consideración que modernizar no sólo implica la compra de unidades nuevas. Por ejemplo, entre los países sudamericanos que poseen buenos sistemas de transporte se encuentran Brasil, Colombia y Perú; estos países han llegado a tener éxito debido a las alianzas estratégicas y económicas entre los empresarios y el gobierno. Además de contar con los espacios y ordenamiento adecuado para echar andar la modernización en el transporte. Otra de las características de estos modelos de transporte urbano, es que en su mayoría utilizan combustibles ecológicos (biodiesel, nitrógeno y etanol) lo que ha evitado incrementos en sus costos y

les ha permitido brindar un servicio de calidad a sus usuarios. Al considerar cómo estos países lograron modernizar el transporte, surgen las siguientes inquietudes. ¿Por qué el gobierno salvadoreño no invierte en la producción de biodiesel? ¿Por qué está tan interesado en que los empresarios adquieran nuevas unidades? ¿A quién busca beneficiar el gobierno con las unidades nuevas, a los usuarios o a los proveedores de los automotores?

El cuarto y último factor a considerar es el papel que ejerce la ciudadanía en cuanto al sector transporte. La sociedad debiera jugar un papel normativo en el desempeño del transporte urbano. La población debería exigir un mayor control en las unidades de transporte: en las áreas de trato a los usuarios, conductores temerarios y un mejor ordenamiento vial. Esto implicaría denuncias por malos tratos, exceso de velocidad y competencia desleal.

En definitiva, el gobierno debiera brindar al gremio de transportistas distintas alternativas para mejorar el servicio. Esto significaría, cuando menos, abrir mayores oportunidades de financiamiento para la compra de nuevas unidades y para la capacitación del recurso humano (motoristas y cobradores). Por otra parte, las autoridades policiales deben redoblar sus esfuerzos para proteger y vigilar el sector.

En conclusión, los atentados que sufre en la actualidad el sector transporte no son más que el reflejo del fracaso de las políticas públicas impulsadas en los dos años de gestión de Elías Antonio Saca. En cuanto a los responsables de las quemaduras y extorsiones al sector transporte, las unidades GOPES y DECO, creadas especialmente para combatir este delito, deben mejorar la investigación y dar con el paradero los responsables, para evitar que estos grupos organizados sigan cobrando más víctimas humanas y materiales. No es posible que estas bandas de extorsionistas y criminales lleven ya más de dos años operando sin que las autoridades logren identificar a sus miembros.

# Incremento de homicidios y fracaso de las políticas de seguridad

El encabezado de estas líneas juega con frases ya trilladas: las cifras de homicidios van en aumento y las políticas gubernamentales de seguridad no parecen encontrar el rumbo que conduzca a frenar dicha situación. Sobre lo primero insisten los medios informativos; lo segundo se guardan de decirlo, pero es una realidad que sale al paso desde el sentido común hasta el análisis más detenido: el fracaso gubernamental. El título podría resultar trillado, pero cuando se trata de asuntos tan vitales para una sociedad como es la seguridad pública, no está de más seguir insistiendo mientras no se observe un cambio significativo no sólo en la situación de inseguridad imperante en el país, sino en el rol que juega el Estado salvadoreño como garante de la seguridad pública.

### Las cifras

Es ya costumbre que las autoridades competentes, Protección Civil y la policía, rindan un informe sobre las estadísticas de emergencias atendidas durante los periodos vacacionales. Para las fiestas patronales de San Salvador no hay excepción. La Dirección de Protección Civil (antes COEN) ofreció un consolidado de los casos atendidos durante las festividades; también la Policía Nacional Civil (PNC) rindió un informe estadístico sobre los homicidios registrados en el mismo periodo.

De acuerdo al informe de la primera dependencia estatal, un total de 26 salvadoreños fallecieron en accidentes de tránsito, aunque los percances viales disminuyeron; la cifra de muertes por esa causa aumentó, pues en el 2005 fallecieron 21 personas. Pero en lo tocante a las estadísticas de homicidios sí hubo un repunte significativo. Según la PNC, un total de 101 salvadoreños (88 hombres y 13 mujeres) fueron asesinados durante las

pasadas festividades de agosto. La misma fuente reportó catorce casos menos durante las festividades del año pasado, cuando los asesinatos sumaron 87.

Si se extiende la comparación, a partir de los datos manejados por diversas dependencias en el periodo vacacional de agosto, las tendencias quedarían del siguiente modo: en el 2003 se registró un total de 63 fallecidos por diversas causas; un año después, la cifra aumentó a 102 víctimas, de las cuales 35 murieron en accidentes de tránsito y 49 fueron asesinadas con arma de fuego, otra cantidad no especificada murió por lesiones provocadas con arma blanca y en otras circunstancias; la mayoría de los asesinatos se concentró en el Área Metropolitana de San Salvador.

El año pasado, el total de muertes violentas ascendió a 103; durante ese periodo vacacional, en 70 de los 87 casos de homicidios estuvieron involucradas las armas de fuego; 21 personas, como ya se dijo arriba, murieron en accidentes viales. De acuerdo al semanario *El faro*, en el 2005, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre 17 y 25 años de edad.

La PNC añade en el análisis de las estadísticas del 2006 que en el 86% de los crímenes cometidos mediaron las armas de fuego. Otras 44 personas, añade la PNC fallecieron por otras causas, entre ellas 10 por intoxicación alcohólica.

Las tendencias observada desde 2003 hasta la fecha permite arrojar algunas conclusiones. En primer lugar, el incontestable incremento de muertes violentas año tras año: 63, en el 2003; 102, en el 2004; 103, durante 2005; y, si se suman los datos manejados por la PNC con los de Protección Civil, durante las festividades del 2006 habrían muerto violentamente al menos 171 salvadoreños (101 homicidios, 26 en accidentes de tránsito y 44 por otras causas).

La suma anterior (171 muertes violentas) conduce a la segunda conclusión. En el último periodo vacacional, sólo las cifras de homicidios (101) habrían casi igualado la suma de muertes por todas las causas (103) ocurridas durante las festividades del año pasado, a menos que la falta de coordinación de las autoridades competentes al manejar estadísticas nos conduzca a un error involuntario. De cualquier modo, si nuestras sumas son correctas, las estadísticas de homicidios van en aumento, lo cual es un indicador inequívoco de que la violencia en las festividades —que se agudiza año tras año— no puede entenderse al margen del clima generalizado de violencia que abate al país.

En tercer lugar, hay que señalar que la mayoría de los crímenes (86% en el 2006) se cometen con armas de fuego, lo cual nos introduce en el debate que se maneja entre la opinión pública en torno al uso de las armas de fuego. Acá las posturas van desde los que se oponen al desarme de la sociedad —la “despistolización”, al decir de algunos—, hasta quienes, como el presidente de la República, sostienen que las armas protegen a la “gente honesta” frente a los “malacates”. Como quiera que sea, lo cierto es que las armas median en más de tres cuartos de los asesinatos cometidos en el país.

Seguidamente, en cuanto al manejo de la información y de las estadísticas, hay que seguir insistiendo en la falta de coordinación entre las autoridades competentes. En esta ocasión, las cifras de Protección Civil (109 muertos) no corresponden con las de la Policía (101), con el pretexto de que una institución habría empezado su conteo dos días antes que la otra. Lo cierto es que si se atiende a las estadísticas de la Policía, es decir, puramente de los homicidios, a estas habría que sumárseles las cifras de otros tipos de muerte violenta, como la de accidentes de tránsito, que también son reflejo, en buena medida, de la cultura de violencia de los salvadoreños: irresponsabilidad al conducir,

abuso del alcohol, prepotencia, imprudencia, etc. Cotejando las estadísticas de la Policía con las de Protección Civil es como acá se ha obtenido el consolidado de 171 muertes violentas durante las festividades recién pasadas. No obstante, como no queriendo inflar las cifras, las autoridades se quedan con las sumas incompletas, mientras la mayoría de los medios informativos, de algún modo advertidos por las autoridades, repiten lo que éstas últimas quieren.

Finalmente, el inocultable incremento de las cifras es suficiente indicador del fracaso de las políticas de seguridad implementadas durante las últimas administraciones presidenciales, por más que estas se ufanen en sus discursos. Esta última apreciación merece detenerse en un apartado propio.

## **El fracaso de las políticas de seguridad**

Las cifras presentadas arriba ilustran la incapacidad del gobierno de Elías Antonio Saca para frenar la ola delincencial que azota al país. Ni los cambios realizados en la dirección de PNC a inicio de este año ni las posteriores modificaciones de los planes contra la delincuencia, han pasado de ser una mera campaña publicitaria. En la realidad cotidiana, a través de las estadísticas que hacen públicas los medios de comunicación —por más que esto incomode al director de la PNC y a las demás autoridades de seguridad pública— los homicidios van en aumento. De hecho, en estas pasadas vacaciones, se registró quince homicidios diarios en promedio, dato alarmante que, en primer lugar, es signo inequívoco de la grave situación de violencia en la que está sumida la sociedad salvadoreña, superando incluso a países que, como Colombia, se hallan en guerra civil. En segundo lugar, las cifras revelan el rotundo fracaso de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno dirigido por Saca, quien siendo candidato presidencial en el 2004 prometió hacer de El Salvador “el país más seguro” de Latinoamérica.

## análisis social

---

Cabe hacerse entonces algunas preguntas: ¿por qué del fracaso de la política gubernamental de seguridad? ¿Cuáles son las causas de la violencia? ¿Quiénes son los responsables de las muertes y por qué otros países con un territorio más grande tienen una menor tasa de homicidios por habitante? Sin pretender dar una respuesta precisa a las anteriores interrogantes, hay que decir que hay muchos datos intencionalmente ocultos, una deficiente investigación científica del crimen —el común y el organizado— y una situación generalizada de impunidad que beneficia a personas no sólo con mucho poder, sino a los mismos delincuentes comunes.

Para reforzar el argumento que sostiene la incapacidad del Estado en cuanto al manejo de la seguridad pública, puede resultar provechoso traer a discusión algunos comunicados firmados por instituciones nacionales e internacionales. La investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre El Salvador, Dina Coloma, denunció desde Londres, Inglaterra, que el Estado salvadoreño tiene falta de interés en administrar justicia contra las “espeluznantes” violaciones a los derechos humanos, por no responder a los llamados de AI desde, “por lo menos, la administración Flores”. El presidente Antonio Saca dijo que no conocía el informe, pero aclaró que el gobierno está luchando con todas las armas legales para perseguir a los homicidas. Sin embargo, en una de las cartas, enviada el 25 de noviembre del año pasado, AI señala “la falta de disposición de las autoridades para investigar minuciosamente los casos de asesinatos de mujeres y el trato que reciben los familiares de las víctimas al presentar sus denuncias”.

En la misma línea, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador emitió un comunicado el pasado 19 de julio en torno a los hechos de violencia ocurridos a inicios de ese mismo mes. Tutela Legal expresó su

condena a “la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales de personas en El Salvador, hecho que se ve agravado porque tales hechos de violencia responden a un patrón sistemático de eliminación de personas, el cual tiene lugar en un escenario de injustificable impunidad, situación que lleva a presumir la tolerancia de las autoridades estatales”. La tesis manejada por Tutela Legal refuerza nuestro argumento: el Estado salvadoreño no solo tolera, sino que fomenta la impunidad.

Si el gobierno de Saca tuviera reales intenciones, una política de seguridad ciudadana, más allá de la permanente campaña publicitaria, debería de darle un tratamiento integral a esta situación de violencia e impunidad. Así señaló el pasado 13 de mayo la Universidad de El Salvador (UES) que hizo, a través de un comunicado, un llamado al poder económico y político del país sobre la situación de violencia social que atraviesa el país. La UES demanda que no se gaste tanto en campañas publicitarias, en eslóganes que no tienen sentido si no se acompañan de acciones encaminadas a una sociedad justa: “A más educación, menos violencia, a más justicia, menos violencia, a más fuente de trabajo, menos violencia, a más corrupción, menos violencia”, reza dicho pronunciamiento. La máxima casa de estudios del país enfatiza que con el dinero que se gasta en la desmedida propaganda gubernamental y con la eliminación de tanta corrupción, se podría invertir en mejorar las condiciones educativas, de salud y vivienda, y crear fuentes de trabajo que beneficien directamente a la sociedad salvadoreña.

La conclusión, entonces, es tajante: mientras no se ataque la raíz real del problema de la violencia y el Estado salvadoreño no asuma su rol en cuanto garante de la seguridad pública, seguirá habiendo más víctimas, más inseguridad, más impunidad y más crímenes horrendos.

## Lluvias, dengue e ineficacia

Ser pobre es sinónimo de vulnerabilidad. Esta afirmación obvia, no lo es tanto para quienes toman las decisiones en el país. Si las autoridades del gobierno entendieran este corolario social, tal vez harían mayores esfuerzos para aliviar la situación de las numerosas familias que viven en condiciones precarias en las ciudades y el campo. Para éstas, un insecto –por insignificante que parezca– se vuelve una bestia asesina y cualquier aguacero medianamente intenso se traduce en amenaza y temor; el piquete de un mosquito o una lluvia pueden terminar en muerte de personas, sobre todo niñas y niños.

Tragedias como la ocurrida el año pasado en Cuisnahuat, Sonsonate, donde perecieron veintiséis personas o las setenta y cuatro vidas que se llevó el huracán Stan, se repiten periódicamente cada invierno sin que se adopten medidas efectivas para evitarlas. En su prevención, el Ministerio de Gobernación –antes con el Comité de Emergencia Nacional (COEN) y ahora con la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (DGPC)– es igual a la selección nacional de fútbol masculino: promete éxitos antes de sus compromisos, pero a la hora buena sus frutos son agriamente negativos.

El primero no puede con la temporada lluviosa, las vacaciones o una emergencia; la segunda no pasa una eliminatoria mundialista desde hace casi veinticinco años y sigue cayendo en la lista de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), ocupando ya el sitio 147 entre 196 equipos. Pero hay una diferencia abismal: la incapacidad de Gobernación causa luto y pérdidas económicas a las comunidades excluidas asentadas junto a ríos y lagos, quebradas o montañas; los fracasos futbolísticos sólo aumentan el desencanto de la “noble afición”.

Y la torpeza estatal en la materia, no acaba. El año pasado, el presidente Antonio Saca prometió destapar el desagüe del lago de Ilopango –obstruido tras los terremotos del

2001– y realizar obras de mitigación, tanto en la zona sur capitalina como en la Cordillera del Bálsamo; no obstante, las obras iniciaron cuando el invierno ya estaba encima. Con semejante ineptitud se arriesgó la vida de los trabajadores y Gabriel Antonio Franco fue la primera víctima, al morir soterrado en la bóveda de la quebrada La Lechuza. Además, todo se ha atrasado y los trabajadores ven cómo su esfuerzo se lo llevan las correntadas de agua; eso sí, aunque los resultados sean mediocres y más caros, se les hará una muy grande y onerosa publicidad.

También se debe considerar la zozobra de quienes habitan esas zonas en remedos de casas o “champas”, cuyos cimientos se han aflojado con los trabajos y ceden fácilmente a la correntada. Lejos de mitigar el peligro, éste se ha incrementado. De eso da fe una familia de la colonia Málaga, que perdió vivienda y pertenencias con la crecida del río Arenal tras la tormenta del lunes 7 de agosto, que arrasó la tierra que la sostenía ¿Le repararán el daño las “ocurrentes” autoridades que socavaron ese terreno?

El mismo día, cincuenta y cuatro minutos de lluvia bastaron para demostrar las falencias del supuesto “Plan Invernal 2006” de la DGPC. Todo el tráfico de la capital se bloqueó y la gente tardó horas en llegar a sus casas. Ríos desbordados, drenajes colapsados, familias en la calle, paredes caídas y parqueos convertidos en lagos daban cuenta de la gravedad del problema y de la incapacidad oficial para atender el riesgo. El cuadro que pintó esa tormenta debería ser un llamado de atención al gobierno para revisar y corregir sus planes, si de verdad los tiene, con la participación de las comunidades afectadas; sin el concurso de éstas, las medidas que tome seguirán siendo ineficaces y podrán ocurrir nuevas tragedias.

Hay otros peligros graves que enfrentan los sectores más pobres en el país y, también, más muestras de incompetencia estatal. Entre todo eso sobresale hoy, de nuevo, el azote del dengue. Esta amenaza ya apareció destacada

# reporte IDHUCA

---

en las planas de los periódicos y las agendas de otros medios. Parece mentira que un mosquito ponga de rodillas a todo el sistema nacional de salud pública, provocando tantas muertes y enfermos en pleno siglo XXI. Aunque esta enfermedad febril y contagiosa sólo fue declarada epidemia nacional en el 2000 y el 2002, lo cierto es que ha sido una constante y no han habido avances sustantivos para derrotarla.

Durante los últimos tres años, el número de casos no ha bajado de cinco mil. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en el 2004 se atendieron 6,408 personas, de las cuales se confirmó el fallecimiento de una; pese al elevado número de consultas, no se declaró la situación como epidemia, como ocurrió dos años antes cuando hubo once muertes entre 5,076 casos. Aunque está claro que el criterio utilizado para tomar tal decisión, fue la cantidad de decesos; pero lo que se quiere mostrar con estas cifras, es la incapacidad oficial para disminuir la cantidad de personas afectadas y que para ocultarla se utilizan denominaciones ambiguas, como “brote epidémico”.

Esto muestra la falta de seriedad para encontrar una solución a las adversidades de las mayorías, en buena medida porque persiste la necesidad de mantener un régimen social y económico injusto y generador de todos estos problemas. Ese mismo que obliga a las personas a vivir amontonadas y que limita sus oportunidades para desarrollarse. Por eso, en la lista de localidades en las que el MSPAS dice haber puesto su atención figuran Soyapango, Ilopango, San Marcos, San Jacinto y Santo Tomás. Los habitantes de estas zonas son los mismos que bloquean las calles para protestar porque pasan semanas, y a veces meses, sin agua potable. Seguramente, cuando pueden proveerse de ella la almacenan en barriles, pilas y otros recipientes que son potenciales criaderos de zancudos. Basta un poco de buen juicio para deducir que al mejorar el servicio del vital líquido disminuirán los contagios. Además, para aumentar la salubridad es necesario mejorar la recolección de basura y ripio. En esto, las

alcaldías tienen buena cuota de culpa; pero también es una labor que el MSPAS debería apoyar.

Asimismo, es necesario mantener las medidas de corto plazo como la distribución de abate y las fumigaciones. No es aceptable escudarse en la supuesta carencia de fondos como lo hizo el Ministro de Salud, Guillermo Maza, para desentenderse de esto último. Ya en otras oportunidades se ha demostrado que los recursos estatales son desperdiciados en asuntos de mucha menor importancia, como los quince o veinte mil dólares estadounidenses reservados para el salario mensual del entrenador de la improductiva selección de fútbol. Se debe, entonces, priorizar de forma adecuada el gasto público. Tampoco es justo que se descargue toda la responsabilidad en la población; aunque ésta debe acatar las medidas para evitar la proliferación del mosquito, no es quien diseña las políticas preventivas ni cuenta con todos los recursos para hacerlas realidad.

Disminuir la vulnerabilidad de buena parte de la población ante lluvias y enfermedades, exige orientar los esfuerzos principales hacia su origen común: la pobreza. Si no hay un compromiso real por aliviar la marginación y la miseria en que viven miles y miles de familias salvadoreñas, en las imágenes de los periódicos y televisoras seguirán apareciendo las caras y los cuerpos de niños, niñas, adultos y ancianos pobres muertos por el dengue o las corrientadas; las voces que se escuchan en las radios contando tragedias que podrían evitarse, también seguirán siendo las de los más débiles.

Hasta el momento, diversos sectores han investigado y propuesto medidas para superar estos males; pero ha escaseado la voluntad gubernamental para analizarlas y ejecutarlas. Con el invierno y la posibilidad de una epidemia encima, sólo falta esperar un milagro para que el presidente Saca y su gabinete no carguen con más muertes en sus conciencias. Su pasividad, desorientación o desinterés le está saliendo caro a todo el país; pero sobre todo, quien sigue pagando la factura más alta es la gente pobre que sufre año con año por las consecuencias de sus desastros.